



La consulta plantea si la comunicación de determinados datos relacionados con un expediente de disciplina deportiva resulta conforme con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

En este punto es preciso señalar que toda revelación de datos constituye una cesión o comunicación de datos, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Tratándose de una cesión de datos, el artículo 11.1 de la propia Ley dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, será posible la cesión sin contar con el consentimiento del interesado en los supuestos en que la misma se encuentre amparada por alguna de las excepciones establecidas en el número segundo del artículo 11 que, a los efectos que aquí interesan, quedan limitadas a la prevista en la letra a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley ó el apartado c), “Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.”

Según se desprende del contenido de la consulta, la comunicación solicitada por el Comité de disciplina Deportiva se efectúa en el seno de un expediente disciplinario, por lo que podría fundamentarse en la necesidad de obtener pruebas para la tramitación de éste.

En la consulta se señala que el Comité de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Golf, tiene un régimen especial y diferenciado y esta diferencia tiene su reflejo en los Estatutos de la Real Federación Española de Golf. Por tanto al desconocer el contenido de los estatutos no podemos fundamentar la cesión de los datos recabados, en los estatutos en relación con el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999. Pues, si en éstos se previera que dicho Comité en el ejercicio de sus funciones pudiera recabar la información que estime necesaria para el adecuado ejercicio de las mismas, la cesión se basaría en el 11.2 c) de la LOPD.

De este modo, en caso de que el deportista o los árbitros se integrase en la correspondiente federación para llevar a cabo la práctica del deporte y los



estatutos de la propia federación previesen expresamente que, en caso de tramitación de un expediente disciplinario, la adscripción a la federación implicaría la aceptación de la practica de todo tipo pruebas, y los datos requeridos se deberán comunicar, amparándose la cesión en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.

No obstante, al desconocer dichos estatutos, podemos señalar que la Ley 10/1990, de 15 de octubre reguladora del Deporte en su artículo 74 donde se contempla la potestad disciplinaria señala que “1. La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares legítimos la facultad de investigar y, en su caso, sancionar o corregir a las personas o Entidades sometidas a la disciplina deportiva, según sus respectivas competencias.

2. El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponderá:

- a) A los jueces o árbitros, durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad deportiva.
- b) A los Clubes deportivos, sobre sus socios o asociados, deportistas o técnicos y directivos o administradores.
- c) A las Federaciones deportivas españolas, sobre: Todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica; los Clubes deportivos y sus deportistas, técnicos y directivos; los jueces y árbitros, y, en general, todas aquellas personas y Entidades que, estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito estatal.
- d) A las Ligas profesionales, sobre los Clubes deportivos que participan en competiciones oficiales de carácter profesional y sobre sus directivos o administradores.
- e) Al Comité Español de Disciplina Deportiva sobre las mismas personas y Entidades que las Federaciones deportivas españolas, sobre estas mismas y sus directivos, y sobre las Ligas profesionales.”

En virtud del contenido de dicho artículo podemos destacar que al requerir la información el Comité de disciplina deportiva, a éste le resulta aplicable el apartado segundo letra e) del artículo 74. En consecuencia, la cesión de la información por parte del arbitro requerido al mencionado Comité, resulta conforme con la Ley Orgánica 15/1999, al amparase dicha cesión en el artículo 74.2 de la Ley del Deporte en conexión con el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

A mayor abundamiento, el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre por el que se desarrolla reglamentariamente la normativa disciplinaria deportiva establecida con carácter general en el Título XI de la Ley 10/1990, del deporte, contempla en el artículo 43 las pruebas que se pueden practicar señalando que “1. Los hechos relevantes para el procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba, una vez que el Instructor decida la apertura de la fase probatoria, la cual tendrá una duración no superior a quince días hábiles ni inferior a cinco, comunicando a los interesados con suficiente antelación el lugar y momento de la práctica de las pruebas.



2. Los interesados podrán proponer, en cualquier momento anterior al inicio de la fase probatoria, la práctica de cualquier prueba o aportar directamente las que resulten de interés para la adecuada y correcta resolución del expediente.

Contra la denegación expresa o tácita de la prueba propuesta por los interesados, éstos podrán plantear reclamación, en el plazo de tres días hábiles, ante el órgano competente para resolver el expediente, quien deberá pronunciarse en el término de otros tres días. En ningún caso, la interposición de la reclamación paralizará la tramitación del expediente.”

Por ello, si la reclamación de dichos datos se basan en la practica de prueba necesarias para tramitar el expediente disciplinario, la cesión de los datos recabados, resultaría conforme con la Ley Orgánica 15/1999, dado que se ampara en el artículo 11.2 a) de la citada Ley en conexión con el Real Decreto 1591/1992, que desarrolla la Ley del Deporte más concretamente, el artículo 75 de la Ley 10/1990 donde se dispone que “Las disposiciones estatutarias o reglamentarias de los Clubes deportivos que participen en competiciones de ámbito estatal, Ligas profesionales y Federaciones deportivas españolas, dictadas en el marco de la presente Ley, deberán prever, inexcusablemente y en relación con la disciplina deportiva, los siguientes extremos:

a) Un sistema tipificado de infracciones, de conformidad con las reglas de la correspondiente modalidad deportiva, graduándolas en función de su gravedad.

b) Los principios y criterios que aseguren la diferenciación entre el carácter leve, grave y muy grave de las infracciones, la proporcionalidad de las sanciones aplicables a las mismas, la inexistencia de doble sanción por los mismos hechos, la aplicación de los efectos retroactivos favorables y la prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con anterioridad al momento de su comisión.

c) Un sistema de sanciones correspondiente a cada una de las infracciones, así como las causas o circunstancias que eximan, atenúen o agraven la responsabilidad del infractor y los requisitos de extinción de esta última.

d) Los distintos procedimientos disciplinarios de tramitación e imposición, en su caso, de sanciones.

e) El sistema de recursos contra las sanciones impuestas.”

No obstante, es preciso señalar que en el supuesto en que dicha información se utilizase para otros fines, se incumpliría con el artículo 4.1 de la Ley Orgánica donde se define el principio de finalidad en el tratamiento de datos de carácter personal, disponiendo que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Este principio se complementa con la exigencia prevista en el artículo 4.2, según la cual “Los datos de carácter personal objeto de



tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.”